

Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En autos RIT 0-1356-2021, RUC N° 2140370487-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, por sentencia de veinte de marzo de dos mil veintitrés, se rechazó la demanda de declaración de existencia de una relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones interpuesta por don Orlando Fernando Aravena Guajardo en contra del Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio, concluyendo la existencia de un cometido específico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834.

En contra del referido fallo el actor interpuso recurso de nulidad, que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por resolución de doce de junio de dos mil veintitrés.

En relación a esta última decisión la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que, en definitiva, se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la unificación de jurisprudencia pretendida por el demandante dice relación con determinar la normativa aplicable a una persona natural bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado, en cuanto a si las funciones desplegadas corresponden o no a requisitos de contratación conforme a cometidos específicos y si se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia.

Agrega que el fallo impugnado realiza una interpretación jurídica errónea de los artículos 11 de la Ley N° 18.834 y 1, 7 y 8 del Código del Trabajo, la que se contrapone a la contenida en los fallos de contraste que acompaña, en el sentido de que habiéndose acreditado elementos de subordinación y dependencia, en actividades continuas, genéricas y permanentes ejecutadas por un trabajador



respecto de un organismo público, debió tenerse por acreditada la existencia de una relación laboral.

Pide se acoja su recurso y se dicte la sentencia de reemplazo, declarando que la interpretación del fallo recurrido es errónea, con costas.

Tercero: Que la sentencia recurrida desestimó la nulidad que se dedujo en contra de aquella que rechazó la demanda, fundada en las causales contempladas en los artículos 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo, señalando, en lo que interesa, que no fue posible acreditar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, atendido que el actor se desempeñó como coordinador y como contraparte técnica de la unidad del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, desempeñando funciones en el Servicio de Salud demandado como analista de control de gestión de administración en la ejecución de obras complementarias del nuevo Hospital de San Antonio, apoyo administrativo en dicha unidad y en su puesta en marcha, celebrando contratos de honorarios con una duración determinada, prestando servicios durante seis años, ejecutando servicios vinculados a la construcción de un nuevo hospital, sin que se hubiera acreditado la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, concluyendo la existencia de cometidos específicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.883.

Cuarto: Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.

Quinto: Que para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que le corresponde a esta Corte, se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que en relación a la materia de derecho propuesta en el intento unificador, se acompañaron como sentencias de contraste las dictadas por esta



Corte en los autos roles N° 23.647-2014, N° 7.091-2015 y N° 40.106-2017, y realizado el examen de la concurrencia de los presupuestos enunciados en la motivación precedente, se puede concluir que tal exigencia no aparece cumplida en la especie, desde que, tal como ha sido resuelto por esta Corte con ocasión de recursos similares presentados por el mismo abogado (en los roles N° 91042-22; N° 157739-22, N° 157926-22 y últimamente en el rol 143.551-2022), no se cumple con el requisito de presentar concepciones o planteamientos jurídicos disímiles respecto de la sentencia que se impugna, y que denoten una divergencia doctrinal que deba ser resuelta y uniformada.

En efecto, las sentencias de contraste se pronuncian sobre la base de presupuestos fácticos diversos al del presente juicio. En la primera, por tratarse de un abogado que prestó servicios al SERVIU, entre los años 2012 y 2013, en funciones relativas a los procesos judiciales de expropiación que se llevaban a cabo en el marco del programa “Habilitación corredor de Transporte Público Avenida Departamental”, cumpliendo jornada, sometido a jefatura, y con un catálogo no taxativo de labores; en la segunda, por tratarse de una trabajadora que en mérito de sucesivos contratos a honorarios celebrados con la Municipalidad de Talca, se desempeñó como jornal de riego, despapelado, corte de césped y desmalezado, en el área encargada del mantenimiento, construcción y reposición de áreas verdes, sujeta a jornada e instrucciones; y, en el tercero, se arribó a la misma conclusión, en favor de un masoterapeuta, que prestó sus servicios personales a la Municipalidad de San Miguel, en el Centro de Salud Familiar Recreo, respecto de quien también concurrían la obligación de cumplir una jornada determinada y de sujetar su labor a la supervisión e instrucciones de la Corporación Municipal de San Miguel.

Como se observa, en los referidos fallos se tuvo por acreditada la existencia de una relación entre los demandantes y las respectivas municipalidades y un servicio público descentralizado, desempeñándose los actores en actividades habituales, continuas y propias de dichos organismos, cumpliendo funciones genéricas, con jornadas de trabajo determinadas, cumplimiento de horarios y bajo la dirección y supervisión de los respectivos jefes de departamentos y/o encargados de programas, cuestión que dista de los hechos acreditados en la sentencia que por esta vía se impugna.

Séptimo: Que, de lo expuesto, queda de manifiesto que los fallos acompañados por el recurrente no contienen una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, pues se dictaron sobre la base de antecedentes de hecho distintos al de marras, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 483 del Código del



Trabajo, lo que conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia** interpuesto por la parte demandante en relación con la sentencia de doce de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Acordada con el **voto en contra** de la abogada **Sra. Rojas**, quien estuvo por entrar a analizar los aspectos de fondo del recurso de unificación de jurisprudencia, pues, a su juicio, las sentencias que se acompañan para su cotejo cumplen con lo dispuesto en el artículo 483 del Código del Trabajo, en la medida que formulan una interpretación jurídica distinta respecto de la materia de derecho objeto del juicio, frente a hechos, fundamentos o pretensiones homologables, cuestión que permite el pronunciamiento que por esta vía se pretende.

Regístrese y devuélvase.

Nº 149.540-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Soledad Melo L., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la Abogada Integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a dieciocho de marzo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

